

Santiago de Cali, 08 de septiembre de 2023

Doctor

CARLOS ARTURO GRISALES LEDESMA

Juez Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali

E.S.D.

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| ASUNTO: | ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 1 INSTANCIA |
| MEDIO DE CONTROL: | REPARACIÓN DIRECTA |
| RADICACIÓN: | 760013333015-2020-00196-00 |
| DEMANDANTE: | JUAN SEBASTIÁN ÁVILA MAZUERA Y OTROS |
| DEMANDADO: | DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI |

MARÍA FERNANDA RENTERÍA CASTRO, de condiciones civiles conocidas por su Despacho, obrando en mi calidad de apoderada especial del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, parte demandada dentro del proceso de la referencia, muy respetuosamente me dirijo a Usted mediante el presente escrito con el fin de descorrer el término de **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN** de la demanda de referencia, solicitando desde ya, se profiera SENTENCIA FAVORABLE a mi representada, desestimando las pretensiones de la parte actora y declarando probadas las excepciones propuestas por mi defendida en su debida oportunidad. Lo anterior, por cuanto no se demostró la responsabilidad administrativa que se pretende endilgar al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, de acuerdo a lo probado en el proceso, conforme a los argumentos que se expondrán a continuación:

Para el efecto, expondré mis argumentos esquematizados de la siguiente manera:

- I. OPORTUNIDAD
- II. LA DEMANDA Y SUS PRETENSIONES
- III. VALORACIÓN Y ANÁLISIS PROBATORIO
- IV. PETICIÓN

I. OPORTUNIDAD

En armonía con lo establecido en el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011 y en atención a lo resuelto en Auto de Sustanciación No. 491 dentro de la Audiencia de Pruebas Acta No. 67 del 29 de agosto de 2023, mediante el cual cierra el debate probatorio, corriendo traslado para presentar alegatos de conclusión por el término de diez (10) días siguientes, los cuales se surtiría en los días 30, 31 de agosto y 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11 y 12 de septiembre de 2023, por lo que se concluye que este escrito es presentado dentro del término dispuesto para tal efecto.

II. LA DEMANDA Y SUS PRETENSIONES

Mediante la acción de reparación directa impetrada por el señor JUAN SEBASTIAN ÁVILA MAZUERA y OTROS, a través de su togado, pretende que se declare administrativamente responsable al Distrito Especial de Santiago de Cali, de todos los daños sufridos con ocasión del presunto accidente acaecido en fecha del 25 de agosto de 2018.

Solicita entonces, los actores, se le impute responsabilidad al Ente Territorial que represento, y como consecuencia se le condene a pagar unas sumas de dinero por concepto de perjuicios materiales en modalidad de lucro cesante consolidado y futuro, e inmateriales en modalidad de morales y daño a la salud o fisiológico, en cuantía total de \$70.224.160; no logrando probar la falla del servicio por parte del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, pues del análisis al acervo probatorio allegado junto con la demanda y pruebas debatidas en plenario, quedo demostrado que no hay evidencia que demuestren que el día 25 de agosto de 2018 existió un presunto accidente de tránsito en el cual estuvo involucrado el señor JUAN SEBASTIAN ÁVILA MÁZUERA mientras conducía la motocicleta de placas ZIZ72D y que la causa eficiente haya sido el mal estado de la malla vial.

Sobre el particular, es importante precisar que no existe Informe Policial de Accidente de Tránsito; solo se tiene la versión del demandante, el cual aporta como pruebas relevantes la atención recibida por los paramédicos de la razón social CUIDADO DE VIDA S.A.S., identificada con NIT: 900.785018-1 e Historia Clínica emitida por la CLÍNICA VALLE SALUD S.A., que da cuenta que el conductor del vehículo de placas ZIZ72D sufre volcamiento, perdiendo el control de la motocicleta, presentando múltiples traumas (Codo izquierdo y muñeca izquierda, quemadura por fricción grado 1, trauma en rodilla izquierda, tobillo izquierdo y pie izquierdo con posterior dolor, edema y limitación funcional), sin dar más detalles sobre las causas eficientes en la producción del daño.

Así las cosas, se debe recordar que para que exista la responsabilidad se requieren tres elementos absolutamente indispensables y necesarios: el daño, el hecho generador del mismo y un nexo de causalidad que permita imputar el daño a la conducta (acción u omisión) del agente generador. El nexo causal se entiende como la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado. La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona y declararla responsable como consecuencia de su acción u omisión, es indispensable definir si aquel aparece ligado a esta por una relación de causa-efecto. Si no es posible encontrar esa relación mencionada, no tendrá sentido alguno continuar el juicio de responsabilidad.

El nexo de causalidad, como lo ha dicho el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia, debe ser probado en todos los casos. Así, por ejemplo en sentencia del 2 de mayo de 2002 se dijo:

“El accionante también tiene que demostrar en juicio la causalidad adecuada entre el daño padecido y la conducta de riesgo imputada al Estado mediante prueba directa o indirecta, porque la ley no ha señalado en materia de relación causal ni presunciones legales respecto de las cuales, probado un hecho (s) el legislador infiera su causalidad adecuada, ni tampoco los conocimientos del juez sobre la realidad social lo autorizan para deducir con certeza el nexo de causalidad eficiente y determinante. La prueba del nexo puede ser: a) directa, mediante los medios probatorios que lo representan por sí mismo y/o b) indirecta, mediante indicios; este medio de convicción lógico indirecto, requiere de la demostración de unos

hechos indicadores que apunten con fuerza el hecho indicado” (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2002, exp. 13477.)

Dicho esto, se itera que la parte actora NO logro probar cuál fue la acción u omisión del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, que contribuyó a las lesiones padecidas al señor ÁVILA MÁZUERA; luego como se indicó en líneas que antecede hay una carencia probatoria acerca de la causa eficiente del daño, el estado y la participación del presunto foramen en la vía causante en la caída del lesionado. Dejando ver la orfandad probatoria para la acreditación de la ocurrencia de los hechos y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que supuestamente se presentaron. Iterándose que la parte activa no logró demostrar de manera fehaciente que, en efecto, haya ocurrido un accidente en fecha del 25 de agosto de 2018, de la manera expuesta en hechos del escrito demandatorio, y en consecuencia el extremo pasivo fuese patrimonialmente responsable. Pues como bien se ha indicado en líneas anteriores, NO existe un suficiente acervo probatorio que permita edificar una presunta falla del servicio a cargo del Estado, ni el presunto perjuicio causado por el accidente; sumado a que no existe Informe Policial de Accidente de Tránsito.

Es así Su señoría, que la Constitución Política en su artículo 90 establece la responsabilidad patrimonial del Estado por daños antijurídicos, así:

“ARTICULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.

Al respecto, el Consejo de Estado ha establecido:

“De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, para que el Estado sea declarado responsable patrimonialmente, es necesaria la acreditación de un daño antijurídico que le sea imputable. De donde, la ocurrencia del daño, desprovista de razones jurídicas para atribuírselo al Estado o de actuaciones que no lesionan patrimonialmente, es insuficiente para imponer la obligación de reparar”. (Negrillas y subrayas fuera del texto original)

Así entonces, al no configurarse uno de los elementos estructurales de la responsabilidad, no hay fundamento para declarar la misma y condenar al Distrito Especial.

Ahora bien, en lo que atañe a las pretensiones esbozadas en el libelo demandatorio, es preciso indicar que no existe prueba idónea que lo acredite, y por ende que permita imputar responsabilidad alguna al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI. Demanda los actores como perjuicios materiales, “Lucro cesante consolidado y futuro”, en la suma de \$120.000.000 de pesos, el cual no logra soportar en derecho con el material probatorio allegado tal rubro. Al respecto, es oportuno recordar que el reclamo del lucro cesante como ganancia frustrada o como provecho económico que no se reportará, y que de no haberse producido el daño hubiese ingresado al patrimonio de la víctima, debe probarse para que proceda su indemnización, toda vez que no hay modalidad eventual que sea objeto de reparación alguna. **Para su reconocimiento debe probarse la actividad productiva: “la regla general será la carga de la prueba en cabeza de la parte actora de cualquier actividad productiva, es decir, reiterando que no debe ser una relación laboral en estricto sentido, sino una actividad de generación de ingresos.** Sobre el tema el Consejo de Estado ha indicado:



*“Por concepto de lucro cesante sólo se puede conceder lo que se pida en la demanda, de forma tal que no puede hacerse ningún reconocimiento oficioso por parte del juez de la reparación directa; así, lo que no se pida en la demanda no puede ser objeto de reconocimiento alguno. **Todo daño y perjuicio que el demandante pida que se le indemnice por concepto de lucro cesante debe ser objeto de prueba suficiente que lo acredite o, de lo contrario, no puede haber reconocimiento alguno**” (artículos 177 del C. de P. C. y 167 del C.G.P.).*

El ingreso base de liquidación deber ser lo que se pruebe fehacientemente que devengaba la víctima...Para que la prueba del ingreso sea suficiente, debe tenerse en cuenta que, si se trata de un empleado, se debe acreditar de manera idónea el valor del salario que recibía con ocasión del vínculo laboral vigente al tiempo de la detención; al respecto, debe recordarse que los artículos 232 (inciso segundo) del Código de Procedimiento Civil y 225 del Código General del Proceso señalan que: “Cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención, o el correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará por el juez como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión”. **El ingreso de los independientes debe quedar también suficientemente acreditado** y para ello es necesario que hayan aportado, por ejemplo, los libros contables que debe llevar y registrar el comerciante y que den cuenta de los ingresos percibidos por su actividad comercial o remitir, por parte de quienes estén obligados a expedirlas, las facturas de venta, las cuales tendrán valor probatorio siempre que satisfagan los requisitos previstos en el Estatuto Tributario, o que se haya allegado cualquier otra prueba idónea para acreditar tal ingreso.

(...)

De no probarse el ingreso, pero sí el desempeño de una actividad productiva lícita, la liquidación se hará con sustento en el salario mínimo legal vigente al momento de la sentencia que ponga fin al proceso de reparación directa¹. (Cursiva y negrilla por fuera del texto original)

Bajo dicho contexto, no es viable reconocer las sumas de dinero pretendidas por el demandante, en la medida que son exorbitantes, alejadas a la realidad, violatorias de las normas y carentes de sustento.

En lo que refiere a los perjuicios morales, se desconoce como la parte activa llegó a la conclusión de que se debe pagar dicha suma de dinero, ya que tampoco existe prueba idónea que permita atribuir al Ente Territorial, la responsabilidad debido a las lesiones padecidas por el señor JUAN SEBASTIAN ÁVILA MAZUERA, por una presunta falla de mantenimiento de la malla por la Avenida 3 Norte con Calle 23B – Avenida de las Américas de la Ciudad de Santiago de Cali, sitio en el que supuestamente se volcó cuando este se desplazaba en motocicleta de placas ZIZ72D. Sobre este perjuicio, es pertinente aclarar que ya el Consejo de Estado a partir del Acta No. 28 de 2014 fijó los baremos para reconocerlo. En seguida se enseñan los topes indemnizatorios en caso de lesiones:

¹ Consejo de Estado, Sección Tercera (2019). Sentencia 73001233100020090013301 del 18 de julio. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

| GRAFICO No. 2 | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| REPARACION DEL DAÑO MORAL EN CASO DE LESIONES | | | | | |
| | NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3 | NIVEL 4 | NIVEL 5 |
| GRAVEDAD DE LA LESIÓN | Víctima directa y relaciones afectivas conyugales y paterno-filiales | relación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos) | Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civil | Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil. | Relaciones afectivas no familiares - terceros damnificados |
| | SMLMV | SMLMV | SMLMV | SMLMV | SMLMV |
| Igual o superior al 50% | 100 | 50 | 35 | 25 | 15 |
| Igual o superior al 40% e inferior al 50% | 80 | 40 | 28 | 20 | 12 |
| Igual o superior al 30% e inferior al 40% | 60 | 30 | 21 | 15 | 9 |
| Igual o superior al 20% e inferior al 30% | 40 | 20 | 14 | 10 | 6 |
| Igual o superior al 10% e inferior al 20% | 20 | 10 | 7 | 5 | 3 |
| Igual o superior al 1% e inferior al 10% | 10 | 5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |

En el caso que nos ocupa, quedo probado en el proceso que el señor JUAN SEBASTIAN ÁVILA MAZUERA, presenta secuelas de eventos anteriores que no tienen relación con los hechos acontecidos para el 25 de agosto de 2018, hoy objeto de Litis; pues del Informe Pericial de Clínica Forense emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Unidad Básica Cali de fecha 14 de agosto de 2023, allegado al proceso, refiere en antecedentes:

“Médico legales: Refiere en siclico, dictamen # UBUCP-DRB-25096-2016 por accidente de tránsito en moto el 12/05/2016 con Mecanismo traumático de lesión: Contundente. Incapacidad médico legal DEFINITIVA SIETE (7) DÍAS”.

(...)

“refiere otro accidente de tránsito el 15/10/2022 con fisura de hombro izquierdo, fisura de tobillo izquierdo”

(...)

“Presenta en presanidad hiperlordosis lumbar; pie plano derecho con deformidad en valgo de talón derecho que no pertenece a los hechos”.

Dicho esto, se reitera que no existe ninguna prueba en el proceso que acredite la gravedad de las lesiones supuestamente padecidas ni que mucho menos estas lesiones sean producto o consecuencia del supuesto accidente.

Por último, en lo concerniente al Perjuicio alegado “daño a la salud o fisiológico”, es preciso resaltar que ante la notoria ausencia de pruebas sobre la responsabilidad que se le pretende endilgar a mi representada Distrito Especial, no habría lugar a proceder con el reconocimiento de tales rubros a los aquí demandantes. Puesto que es evidente que el Ente Territorial, no tiene obligación indemnizatoria alguna frente a los demandantes, en tanto **no existe suficiente evidencia que permita declarar la responsabilidad estatal**



endilgada. En relación con este perjuicio resulta claramente excesiva y alejada de los parámetros establecidos por el Consejo de Estado.

En este orden de ideas, quedo demostrado que en el plenario no obra ninguna prueba que respalde los hechos expuestos en la demanda. Del material aportado junto con la demanda no existe un elemento fehaciente que acredite la existencia del supuesto hueco en el que pudiera haber caído el demandante. Por consiguiente, la sola mención de la presencia de un presunto obstáculo en la vía que no tiene tal demostración, no es suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que, con tal situación, se causan.

III. VALORACIÓN Y ANÁLISIS PROBATORIO

1. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL HOY DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI:

En el caso objeto de Litis, se pudo establecer que no se encuentran acreditados los elementos constitutivos de la falla en el servicio por parte del Ente Territorial como demandada. Por lo tanto, no es imputable a la Administración Distrital el daño sufrido por el señor JUAN SEBASTIAN ÁVILA MAZUERA. No hay un solo elemento de convicción que permita esclarecer que el hecho dañoso acaecido puede atribuírsele al **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**, pues es la imputación el elemento esencial para realizar el reproche.

Al Ente Territorial, se le endilgó falta de mantenimiento y falta de señalización en las vías públicas. Sin embargo, en el plenario no obra ninguna prueba que respalde los hechos expuestos en la demanda. No existe en el plenario un elemento fehaciente que acredite la existencia del supuesto hueco en el que pudiera haber caído el demandante. Por consiguiente, la sola mención de la presencia de un presunto obstáculo en la vía que no tiene tal demostración, no es suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que, con tal situación, se causan.

Y es así, que con respecto a las pretensiones de la demanda, estas carecen de fundamentos facticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad, toda vez que la parte actora no logró acreditar la supuesta falla en el servicio endilgada al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI. No se arrimaron al proceso elementos probatorios ni pertinentes, ni útiles, ni conducentes que permitieran acreditar la responsabilidad de la parte pasiva. Se logró demostrar que en el caso que nos ocupa y respecto de la supuesta responsabilidad que se le pretende endilgar a la Administración Distrital, no se cumplieron los requisitos necesarios que permitieran el surgimiento o estructuración de una responsabilidad en cabeza de dicha entidad, toda vez que esa clase de vínculo jurídico solo se presenta si se reúnen los elementos esenciales para tal efecto, los cuales brillan por su total ausencia, particularmente la del daño antijurídico que debe ser ocasionado por un hecho o un acto realizado con culpa por parte la parte pasiva, y además que entre éste y aquél, existe el ineludible nexo de causalidad, el cual, resulta completamente inexistente en el caso que nos atañe.

En síntesis, analizados los elementos materiales probatorios que obran en el plenario, se logra dilucidar que, no existe Informe Policial de Accidente de Tránsito; solo se tiene la versión del demandante, el cual aporta como pruebas relevantes la atención recibida por los paramédicos de la razón social CUIDADO DE VIDA S.A.S., identificada con NIT: 900.785018-1 e Historia Clínica emitida por la CLÍNICA VALLE SALUD S.A., que da



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

cuenta que el conductor del vehículo de placas ZIZ72D sufre volcamiento, perdiendo el control de la motocicleta, presentando múltiples traumas (Codo izquierdo y muñeca izquierda, quemadura por fricción grado 1, trauma en rodilla izquierda, tobillo izquierdo y pie izquierdo con posterior dolor, edema y limitación funcional), sin dar más detalles sobre las causas eficientes en la producción del daño. Sin embargo, dichas pruebas no son suficientes para respaldar la presunción de la falla en el servicio, pues no existe un sustento que permita establecer la omisión alegada por la parte demandante, relativa a la existencia de un hueco o a la ausencia de señales del estado de la vía. Por tal motivo no es posible endilgar responsabilidad alguna al Ente Territorial ya que la parte demandante no asumió la carga probatoria que le correspondía, de conformidad con el artículo, 167 del CGP, al que se acude en virtud del artículo 211 del CPACA.

Durante el desarrollo del proceso nunca se probó qué el señor JUAN SEBASTIAN ÁVILA MAZUERA, se accidentara y mucho menos que este haya sido por causa de un hueco en la vía como quieren señalar los hechos narrados en la demanda, en ese sentido sería improcedente desde todo punto de vista declarar responsable al MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI hoy categorizado como DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO, DEPORTIVO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.

Ahora bien, la parte actora pretende demostrar el supuesto accidente a través de unas fotografías, las cuales no tienen ninguna connotación probatoria, pues no hay ningún elemento que permita inferir que esas fotografías hacen referencia al hueco que supuestamente causó la caída, qué existiera para el día en que supuestamente ocurrieron los hechos, qué se ubicara en la dirección indicada, y demás circunstancias de modo, tiempo y lugar que con la sola representación figurativa quedan en la incertidumbre. Sobre el valor probatorio de las fotografías se ha referido el Consejo de Estado:

***ii) El valor probatorio de las fotografías y los hechos que con ellas se documentan.** El material fotográfico, como medio de prueba, se enlista dentro de las denominadas documentales² y, en tanto documento, reviste de un “carácter representativo, que muestra un hecho distinto a él mismo”³. De ahí que, “[l]as fotografías por sí solas no acreditan que la imagen capturada corresponda a los hechos que pretenden probarse”⁴ con lo cual, el valor probatorio que puedan tener “no depende únicamente de su autenticidad formal, sino de la posibilidad de establecer si la imagen representa la realidad de los hechos que se deducen o atribuyen, y no otros diferentes, posiblemente variados por el tiempo, el lugar o el cambio de posición”⁵*

Es así, entonces que las referidas fotografías no tienen connotación probatoria por no tener certeza sobre la persona que las realizó y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron tomadas, situación que impide su valoración y consecuentemente, la imposibilidad de estructurar la causalidad.

Específicamente, los medios de prueba como son fotografías, atención recibida por los paramédicos de la razón social CUIDADO DE VIDA S.A.S., e Historia Clínica emitida por la CLÍNICA VALLE SALUD S.A y demás documentales aportadas al plenario, valorados en conjunto, **no acreditan el mal estado de la vía pública, ni mucho menos que este fue la causa efectiva del daño.**

² Art. 251 del C.P.C., norma que rige el caso.

³ Corte Constitucional, Sentencia T-930^a, del 6 de septiembre de 2013, fundamento 4.3, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

⁴ Ibid, fundamento 4.3.1.

⁵ Ibid, fundamento 4.3.2.



En conclusión, dichos documentos aportados, no son medios probatorios que acrediten la concreción, la causa eficiente y/o la responsabilidad del accidente.

2. INEXISTENCIA DEL NEXO CAUSAL ENTRE EL PRESUNTO ACCIDENTE Y EL ACTUAR DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI:

La parte actora no logró demostrar que la causa del evento dañino alegado fue en efecto, la falta de mantenimiento y señalización de la malla vial. Pues NO existe dentro del proceso y pruebas debatidas en plenario, documentos o testimonios fehacientes que logren demostrar que las lesiones padecidas por el señor JUAN SEBASTIAN ÁVILA MAZUERA para la época de los hechos haya sido por consecuencia de la supuesta existencia de un hueco en la vía, tratándose entonces, de un suceso o acaecimiento por el cual el DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI no tiene el deber jurídico de responder.

Lográndose establecer, que lo descrito en el libelo demandatorio solo tiene sustento en las aseveraciones que el mismo accionante ÁVILA MAZUERA, realizó ante quienes le dieron asistencia médica, cuyo conocimiento de los hechos parte de la narración que el citado señor hizo, manifestaciones de las cuales no se tiene acervo probatorio alguno más allá de lo que el mismo expresa, pues con la demanda no se acompañó Informe de Autoridad de Tránsito, que puedan acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la ocurrencia del accidente en hechos del 25 de agosto de 2018, a las 11:55 p.m., a la altura de la Avenida 3 Norte con Calle 23B - Avenida de las Américas de la Ciudad de Santiago de Cali.

Sobre el nexo de causalidad se ha definido como la determinación de que una conducta antijurídica es la causa eficiente de un daño. Así lo ha entendido en profusa jurisprudencia el Honorable Consejo de Estado, para lo cual valga traer a colación la siguiente consideración emanada de dicha Corporación.

*“(...) El nexo causal es la determinación de que un hecho es la causa de un daño. En esa medida, en aras de establecer la existencia del nexo causal es necesario **determinar si la conducta imputada a la Administración fue la causa eficiente y determinante del daño** que dicen haber sufrido quienes deciden acudir ante el juez con miras a que les sean restablecidos los derechos conculcados (...)”* **Negrita por fuera del texto original.**

Es así entonces, que verificada la inexistencia del nexo causal y sin cumplirse otro requisito para la declaración de responsabilidad del Ente Territorial, no pueden prosperar las pretensiones de la parte actora. Teniendo en cuenta, **que el nexo causal debe ser probado en el proceso**, iterándose que no obra prueba en el expediente sobre el hecho incuestionable de que el Distrito Especial fue quien ocasionó el daño que jurídicamente se alega, razón por la cual, dado que el nexo causal no se presume, no está debidamente sustentado ni probado.

3. AUSENCIA DE PRUEBAS QUE DEMUESTREN LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR EN QUE SUCEDIERON LOS HECHOS:

En el presente caso, NO existe un suficiente acervo probatorio que permita edificar una presunta falla del servicio a cargo del Estado, ni el presunto perjuicio causado por el accidente; sumado a que no existe Informe Policial de Accidente de Tránsito. Por lo tanto, no se logran estructurar los elementos que configuran la responsabilidad de la administración distrital.

Para partir de la base de atribuir responsabilidad al Ente Territorial, el togado de la parte demandante, debió determinar desde la perspectiva causal qué conducta, acción u omisión, fue la que produjo el daño. Lo referido por el apoderado demandante son apreciaciones subjetivas de las que no hay prueba alguna en la medida que no están acreditadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar. La hipótesis de responsabilidad fue construida de manera infundada por la parte actora para establecer la legitimación por pasiva del Distrito Especial, omitiendo prueba alguna que permitiera atribuir a esta entidad el daño generado.

Respecto a ello, la parte actora, desconoce la teoría de la causalidad adecuada, al no probar cuál fue la acción u omisión del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI presente en el mundo fenoménico que contribuyó a causar las presuntas lesiones al señor JUAN SEBASTIAN ÁVILA MAZUERA. Bastó con un análisis superfluo del apoderado demandante para señalar inmediatamente al Ente Territorial, desconociendo así la jurisprudencia del Consejo de Estado la cual ha establecido: *“La demostración del mal estado de la vía no es, por sí sola, suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en caso de producirse un daño, pues esa prueba debe acompañarse de la acreditación del nexo causal entre este y la acción u omisión en que pudo haber incurrido la administración en su deber de mantenimiento de la malla via”*⁶.

Insistiendo entonces, que NO hay certeza frente a como fue la caída del hoy demandante, ÁVILA MAZUERA, ni mucho menos si el supuesto hueco en la vía (Avenida 3 Norte con Calle 23B – Avenida de las Américas de la ciudad de Santiago de Cali), haya sido el causante de las presuntas lesiones padecidas por el actor.

Aunque con la demanda se aportaron fotografías que presuntamente reflejan el lugar de los hechos al momento del accidente, dichos documentos no cumplen con las exigencias jurisprudenciales para su valoración.

En sentencia del 8 de noviembre de 20205, la Sección Tercera del Consejo de Estado ratificó las subreglas estructuradas en torno a la valoración del material fotográfico en los siguientes términos:

*(...) Sin embargo, no existe certeza acerca de las condiciones de tiempo en las que fueron tomadas, toda vez que, si bien todas tienen registrada la fecha del “25/11/2003 11:30 am”, **no es menos cierto que no se aportaron elementos que permitan determinar si dicha fecha es aquella en la que se tomaron o en la cual se imprimieron.***

Se itera, que el material fotográfico carece de los elementos para su validez en cuanto a que no es posible establecer la relación entre el medio probatorio y el hecho que se pretende probar, es decir, no existe forma de establecer la época de estas imágenes, o si

⁶ C. E. Sec. Tercera. Sent. 08001233100019980066301, feb. 08/2017. C.P. Hernán Andrade.



correspondan al lugar del accidente. La parte demandante parte de la premisa que existe una omisión por parte de la Entidad a título de falla en el servicio, debido a la inexistencia de señales de advertencia sobre el estado de la vía o por la existencia de un hueco en la vía; como segunda premisa infiere que es el Ente Territorial el encargado de mantener en buen estado las vías; para concluir que se debe declarar administrativamente responsable del daño.

Sin embargo no existe evidencia que respalde la presunción de la falla en el servicio, no existe un sustento que permita establecer la omisión alegada por la parte demandante, relativa a la existencia de un hueco o a la ausencia de señales del estado de la vía.

Pues de los testimonios rendidos por los señores HARVY LEÓN ERAZO DAZA y GUSTAVO ADOLFO TORRES URBANO, en desarrollo de audiencia de pruebas celebrada de manera presencial en fecha del 29 de agosto de 2023 presentan incongruencias en sus relatos.

Testimonio de HARVY LEÓN ERAZO DAZA:

PREGUNTA: Minuto: 22:18 – 22:28 – ¿Usted ha manifestado que se desplazaba con otros compañeros, es lo que yo entiendo abordar el taxi, es decir que para el momento de los hechos había personas de la clínica con usted?

CONTESTA: Minuto: 22:28 – 22:32 -: Si había un compañero cuando nosotros salíamos.

PREGUNTA: Minuto: 22:45 – 22:52 ¿... Usted llamo a la ambulancia? ¿Quién llamo a la ambulancia?

CONTESTA: Minuto: 22:51 – 23:25 “No, cuando hubo el accidente... no fui solamente el presencial de esto, habían varias personas de las cuales fui yo el primero el que me acerque y cuando vimos que se cayó se le presta los primeros auxilios y alguien llamo al tránsito y ambulancia que es el protocolo que siempre uno utiliza de llamar al tránsito y policía,....”

PREGUNTA: Minuto: 23:25 – 23:30 ¿Usted estuvo entonces al momento en que llego la ambulancia a recoger al señor JUAN SEBASTIAN?

CONTESTA: Minuto: 23:30 “Si claro”

Testimonio de GUSTAVO ADOLFO TORRES URBANO:

PREGUNTA: Minuto: 35:59 – 36:00 ¿Quién le presto los primeros auxilios?

CONTESTA: Minuto: 36:04 – 36:08 “Los primeros auxilios se los presto los transeúntes”

PREGUNTA: Minuto: 36:16 – 36:21 ¿Se acuerda usted que transeúntes, que personas así en particular, le presto los primeros auxilios’

CONTESTA: Minuto: 36:22 – 36:38 “Estaban la gente como el vigilante de los carros...., el que tengo presente es el de los carros”

PREGUNTA: Minuto: 39:06 – 39:12 ¿Sabe usted si el día de los hechos del accidente JUAN SEBASTIAN recibió atención o primeros auxilios de algún enfermero?



CONTESTA: Minuto: 39:12 – 39:16 “Antes de que llegara la ambulancia no”

En consecuencia, deben negarse las pretensiones de la demanda, ante el incumplimiento de la carga probatoria por parte del apoderado de la parte actora, consagrada en el artículo 167 del Código General del Proceso, norma que dispone: “*Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen*”, y en este caso concreto, ha existido una orfandad probatoria para generar al Juzgador el convencimiento necesario para dar credibilidad a los hechos en que se fundamenta la demanda y lograr de paso la prosperidad de las pretensiones en la forma por ella esperada. Sobre el particular, el Consejo de Estado ha dicho:

“las pruebas constituyen el derecho de las partes que acuden a un proceso y principalmente el fundamento de toda pretensión u oposición, en tanto corresponde a la parte actora probar los fundamentos de hecho de su demanda y a la parte demandada los de su excepción o defensa, de donde se erige la realidad jurídica de las partes frente a la Ley, proporcionando al juez certeza a la hora de fallar”.

Es claro entonces, que no hay prueba alguna, si quiera indiciaria, que permita objetivizar la atribución causal a mi representada DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, pues si no se configuró el argumento de que el Ente Territorial, incidió en el resultado dañoso, desaparece la causa eficiente para que el juez determine la responsabilidad. Una vez acreditado que no existe causalidad material, menos puede concluirse que existe causalidad jurídica ya que, atendiendo al régimen de imputación de falla probada del servicio, no hay prueba en el proceso del incumplimiento obligacional del Distrito Especial de Santiago de Cali.

4. INSUFICIENCIA PROBATORIA DE LOS SUPUESTOS PERJUICIOS Y EXAGERADA TASACIÓN DE LOS MISMOS:

Como bien se expuso en líneas que antecede, la tasación de los PERJUICIOS MATERIALES en modalidad de Lucro Cesante (Consolidado y futuro), no obedecen a un sustento probatorio que fehacientemente indique el perjuicio exacto en que incurrieron los demandantes. Pretensión que no tiene vocación de prosperidad, por cuanto como se ha sustentado los perjuicios reclamados por el demandante, no fueron acreditados debidamente. Pues no obra prueba alguna que acredite que el señor JUAN SEBASTIAN ÁVILA MAZUERA, para la época de los hechos se encontraba trabajando, o en su defecto estar realizando aportes al Sistema de Seguridad Social para la fecha del acaecimiento de los hechos y posteriores. No existiendo entonces prueba de la actividad económica realizada por dicho señor, pues no sola basta con manifestar que para la fecha del acaecimiento el citado señor se encontraba desempeñando funciones de repartidor de domicilio para la plataforma RAPPI.

Es así, que en el presente caso no se demostró la responsabilidad del Distrito de Santiago de Cali, resultando tales pretensiones exorbitantes y respecto de las cuales no obra prueba en el expediente. Por el contrario, solamente demuestran un claro afán de lucro de la parte activa, los cuales no pueden ser endilgados a la administración.

PERJUICIOS INMATERIALES:

En relación a los perjuicios de índole inmaterial alegados por concepto de daños morales, y a la salud; conforme a lo obrante en el proceso, se precisa que el daño moral deprecado, desborda los parámetros fijados por el Consejo de Estado en la Sentencia de



Unificación del 28 de agosto de 2014, quién señaló que los mismos deben ser reconocidos, siempre y cuando se encuentren acreditados en el plenario, lo que no acontece en el presente caso, ya que con la demanda no se aportó prueba alguna que permita dilucidar claramente la existencia del supuesto daño moral padecido por la parte actora y mucho menos que este fue generado por el accidente acaecido en hechos del 25 de agosto de 2018.

Sobre el daño a la salud, es preciso traer a colación lo dispuesto por la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia de 28 de agosto de 2014, mediante la cual se unificó jurisprudencia respecto del reconocimiento del denominado perjuicio por daño a la salud. Este pronunciamiento implicó un replanteamiento de los perjuicios denominados “alteración a las condiciones de existencia” y “vida en relación” y se limitó su contenido a la afectación o limitación a la integridad psicofísica de una persona.

Pues los parámetros estructurados en el precedente de unificación han sido ratificados en los siguientes términos:

(...) sea lo primero manifestar que esta Sección, siguiendo los lineamientos planteados en sus sentencias de unificación, formuló una nueva tipología de perjuicio inmaterial diferente a los denominados perjuicio fisiológico, daño a la vida en relación y alteración a las condiciones de existencia, para en su lugar reconocer las categorías de daño a la salud (cuando estos provengan de una lesión a la integridad psicofísica de la persona) y de afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados...

En relación con el daño a la salud, la Sección Tercera estableció que aquella no estaba encaminada al restablecimiento de la aflicción o el padecimiento que se genera con aquel, sino que se dirigía a resarcir económicamente “-como quiera que empíricamente es imposible- una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo”, razón por la cual procedía únicamente en favor de la víctima directa del daño, dependiendo de la gravedad o levedad de la lesión, con base en el porcentaje de disminución de capacidad psicofísica que se hubiere causado”⁷

Tales pretensiones resultan ser inaceptables y respecto de las cuales no obra prueba en el expediente. Así las cosas, las mismas solamente demuestran un claro afán de lucro de la parte activa, los cuales de ninguna forma pueden ser endilgados al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.

Por lo anterior, me opongo a la prosperidad de dichas pretensiones, pues al ser notoria la ausencia de pruebas sobre la responsabilidad del Ente Territorial demandado, no habría lugar a que la parte pasiva se viera obligada a proceder con el pago de la indemnización perseguida por la aquí demandante.

IV. PETICIÓN:

Por las razones expuestas anteriormente y de conformidad con los argumentos de defensa exhibidos y excepciones propuestas en la contestación de la demanda, y en el presente escrito de alegatos, solicito a su Honorable Despacho se sirva declarar probadas

⁷ Consejo de Estado, Sección Tercera (2018). Radicación No. 27001-23-31-000-2011-10226-01(50776), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Agosto 16.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

las excepciones presentadas por el Ente Territorial, y de esa forma exonerar de responsabilidad al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.

De usted su Señoría, respetuosamente;

MARÍA FERNANDA RENTERÍA CASTRO

C. C. N.º 67.000.403 de Cali (Valle)

T. P. N.º 186.207 del C. S. de la J.

Teléfono: 3166579144

Correo Electrónico: notificacionesjudiciales@cali.gov.co
mariafernandarenteriacastro@gmail.com